

Universidad de La Plata: de la Provincia a la Nación y su posterior autonomía, a través de seis generaciones (*)

POR **JUAN JOSÉ HERRERO DUCLOUX** (**)

Sumario: I. Introducción.– II. El origen y significado de la universidad. Las universidades en nuestro territorio nacional.– III. La Universidad de La Plata en su etapa provincial.– IV. Nacionalización de la Universidad de La Plata.– V. La Reforma Universitaria.– VI. Consagración legislativa de la “autonomía universitaria” y en la Constitución Nacional de 1949.– VII. Gratuidad de la Universidad.– VIII. Consagración constitucional de la autonomía y la gratuidad de la universidad pública.– IX. Colofón.– X. Aclaración final.– XI. Bibliografía.

Un aniversario es un acontecimiento importante, porque el pasado vuelve a hacer latir el corazón al recordar las páginas ya escritas en el Libro de la Existencia.

Nicolás Avellaneda (Citado en *Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria*, 2004, p. 259).

(...) el Congreso, al dictar los planes de estudios, debe proponerse la realización de los elevados propósitos de la Constitución, que desea no solamente que se forme una Nación ilustrada, capaz de cumplir con pleno discernimiento sus destinos, y que cada hombre lo sea en particular para conservar, ejercer y defender la suma de sus derechos

(*) Al final de este pequeño trabajo se intentará aclarar la cuestión de las “seis generaciones”.

(**) Profesor Adjunto ordinario de Derecho Constitucional y Jefe de Trabajos Prácticos de Historia Constitucional. Profesor del Posgrado de la especialización en Derecho Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, UNLP. Abogado Relator del Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Abogado.

civiles y políticos, sino hacer del Estado, o del gobierno mismo, una realización de los elevados fines de la enseñanza: es decir, que por la ciencia y las artes la Constitución se cumpla en su letra y en su espíritu, que la Nación sea por la ciencia sabia, y por el arte hermosa.

Joaquín V. González (1935, p. 166).

Cada vez es más claro que no hay un ideal abstracto de educación. La educación se refiere a un hombre dado, a un pueblo dado. La formación universitaria es la formación de los nacionales en la Nación, es pedagogía nacional. Las universidades nacionales son órganos de la Nación para el examen de los problemas que afectan su vida.

Gabriel del Mazo (1943, p. 11).

I. Introducción

Escribir sobre la universidad, en general, y sobre la Universidad Nacional de La Plata en particular, indudablemente es una cuestión sobre la que me alcanzan las generales de la ley, ya que no solo me involucra en forma personal, sino también a varias generaciones de familiares directos que me precedieron. De ahí que me será dificultoso despegarme de ciertas subjetividades, que quizás no contribuyan a la cientificidad de este pequeño aporte, pero intentaré compensar con la pasión que me provoca abordar estos temas que involucran a mi propia historia e identidad personal, profesional y familiar. De alguna forma esta es una buena oportunidad para ser compartida.

Para ello, en primer lugar haré unas breves referencias a la aparición en Europa de la “universidad”, su propagación por Europa y América, y en este último continente específicamente en lo que se refiere a nuestro territorio nacional. Me detendré en la Universidad de La Plata, fundada como provincial, para luego pasar a la esfera de la Nación, siendo su indudable *alma mater* y gestor el ilustre Joaquín V. González. Luego trataré el significado y los efectos que produjo la denominada “Reforma Universitaria”. Por último, realizaré ciertas consideraciones sobre la autonomía y gratuidad, principios que fueron receptados por medio de leyes y decretos, para luego ser definitivamente establecidos y en forma expresa en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, en el año 1994.

II. El origen y significado de la universidad. Las universidades en nuestro territorio nacional

La universidad surgió sobre la base de asociaciones particulares de maestros y discípulos, derivando la palabra *universitas* del término latino *universum*, que significa “reunido en un todo”, es decir, fue gestada con el objeto de que sea identificada con el concepto de “totalidad”. De allí que en la Edad Media se denominaba a la institución que poseía dicha totalidad como la *universitas magistrorum et scholarium*, esto es, la comunidad de maestros y alumnos, los que conformaban una corporación reconocida por la autoridad de la iglesia, con amplia autonomía y jurisdicción propia al igual que los gremios. Por eso las primeras instituciones universitarias fueron diseñadas respetando el modelo utilizado para defender los intereses de las distintas profesiones y oficios.

Las primeras universidades se conformaron, en un primer momento, como instituciones de *studium generale*, entendiéndose el término *generale* no como sinónimo de que se encontraran incluidas y alcanzadas todas las ramas del saber, sino que en su seno eran aceptados los alumnos de toda la zona de influencia del cristianismo, más allá de la nación o reino en el que vivieran. Por otra parte, los *studia generalia* eran corporaciones conformadas por maestros y estudiantes, de allí el término *universitas* antes descripto. De esta forma, la palabra latina *universitas* también servía para identificar la totalidad de los integrantes de la institución, en contraposición con las personas del exterior, por lo tanto, aquellas que no pertenecían, quienes estaban impedidos de gozar de los derechos y obligaciones, entre ellos de practicar el oficio o profesión que se enseñaba.

La *universitas* era un ámbito reservado al saber en su más amplia significación, donde convergían dos polos opuestos: las personas con apetencias de aprender, y otras con el gusto de enseñar cuestiones tanto teóricas como prácticas. A su vez, era el espacio donde se transmitían las experiencias del maestro, producto de su mayor edad.

En la Europa anterior a “la paz de Westfalia”, es decir, en forma previa a la irrupción de los estados nacionales europeos tal como son hoy concebidos, los estudiantes migraban en búsqueda de la *universitas* donde se enseñaran las cuestiones que respondían a sus intereses y vocaciones. Los estu-

diantes generalmente se hospedaban en albergues denominados colegios, bajo el cuidado de maestros.

Cabe tener especialmente presente que las *universitas* intentaron desde su mismo origen poseer un amplio margen de autonomía respecto a la autoridad de turno, contando para ello del apoyo de la propia Iglesia. Ello era así porque para su creación y fundación se recurría a una bula papal, oportunidad en la que se establecían y otorgaban determinados privilegios a la nueva institución universitaria, entre las que se encontraban la libertad de aprender y enseñar, la potestad de otorgar títulos habilitantes por los que se acreditaban idoneidad y habilidades. Por último, a esas instituciones se les reconocía el autogobierno.

En ese entonces, para extender y propagar los conocimientos, todas las universidades utilizaban como único idioma el latín. Coincidentemente en Europa, para ese entonces, había una marcada inclinación a transmitir la cultura, la filosofía, el arte y la teología, saberes que conformaban un sistema complejo, y que en el ámbito universitario eran perfeccionados y luego enseñados a los alumnos.

(...) existía la concepción del conocimiento propio de la Europa medieval que sostenía ‘somos enanos sobre hombros de gigantes’. La sabiduría antigua de los gigantes se encontraba contenida en grandes libros: la Biblia, las obras de los Padres de la Iglesia, las obras de Aristóteles (...) el gran libro de la ley era el *Corpus Juris Civilis* y, especialmente, el *Digesto*. Su contenido era el derecho romano, la ley del Imperio y de la Iglesia (porque la Iglesia vivió bajo la ley romana); por lo tanto tenía detrás de sí la autoridad del papa y del emperador temporal (Merryman, 2014, p. 30).

De esta forma, fue fundada la universidad de Bolonia, la cual es considerada como la primera de su especie, desde el punto de vista temporal. Esta institución respondía, pues, a las características de una *universitas* destacándose como escuela de leyes. Allí se estudiaba el derecho romano que surgía del *Corpus Juris Civilis* de Justiniano. Bolonia y el resto de las universidades que se fueron estableciendo en el norte de la actual Italia fueron el centro del estudio del Derecho dentro del mundo occidental y, por esa razón, acudían hacia allí de todos los lugares de Europa personas dispuestas a aprender los contenidos del *Corpus Juris Civilis*. Una vez concluidos

sus estudios los nuevos profesionales regresaban a sus lugares de origen, y algunos de ellos, a su vez, fundaron universidades donde luego también se iba a enseñar el derecho romano oportunamente aprendido en las universidades del norte de Italia. De esta manera ese sistema jurídico pasó a ser la base común del derecho de toda Europa.

En esta forma, el derecho civil romano y las obras de los Glosadores y Comentaristas se convirtieron en la base de un derecho común de Europa, el que ahora llaman el *jus comune* los historiadores del derecho. Había un cuerpo común de derecho y de escritos acerca del derecho, un lenguaje común y un método de enseñanza e investigación (Merryman, 2014, p. 32).

Luego de Bolonia, fueron fundadas universidades en las ciudades de Salerno y París. Poco tiempo después se formó la Universidad de Oxford, aproximadamente en el año 1163. Más tarde en Cambridge, en el año 1209, ambas de Inglaterra. En España se estableció la universidad de Salamanca, en el año 1218. Por su parte en Francia, entre los años 1220 y 1229 se crearon *universitas* en Montpellier y Toulouse. También en la actual Italia, se destacan las universidades de Padua y Nápoles (años 1222 y 1224). Finalmente en el siglo XIV en el mundo germánico, eslavo y escandinavo se hizo lo propio por medio de las universidades de Heidelberg en el año 1386, Colonia en 1388, Cracovia, y Uppsala (años 1451 y 1477, respectivamente). Así, para el siglo XVI, se estima que en Europa existían alrededor de sesenta universidades.

Ahora bien, luego del proceso de conquista y colonización llevado a cabo por España en América, al momento de comenzar el proceso de independencia, el entonces Virreinato del Río de la Plata albergaba en su amplio territorio dos universidades: una con sede en la ciudad de Córdoba (entonces denominada Universidad Mayor de San Carlos) (1) y la otra universidad en Chuquisaca, Alto Perú, actual territorio de la República de Bolivia (2).

(1) La Universidad Mayor San Carlos fundada en el año 1622 por los jesuitas, ostentando el honor de haber sido la primera universidad con asiento en lo que luego fuera designado como Virreinato del Río de la Plata.

(2) Su nombre completo era Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, y fue fundada en el año 1624. Según la Bula Papal de Gregorio XV, ostentaba los títulos de Universidad Mayor, Real y Pontificia.

En la universidad con asiento en Córdoba, fundada por los jesuitas, se tomó a Salamanca como modelo de universidad, adoptándose, por lo tanto, el sistema de pensamiento escolástico. Allí se estableció su propio gobierno y funcionamiento interno. En el año 1828 pasó esta Alta Casa de estudios al ámbito de la provincia de Córdoba.

Ya en el período independiente, en 1821 fue fundada la Universidad de Buenos Aires por el entonces gobernador Martín Rodríguez. El inspirador de su creación fue el ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia, y se designó al sacerdote Antonio Sáenz, como su primer rector. Claramente se trataba de una universidad de carácter provincial.

De esta forma, al sancionarse el texto constitucional de 1853 existían en la República Argentina dos universidades, ambas provinciales.

La Universidad de Córdoba fue nacionalizada en 1854 durante la presidencia de Urquiza, disponiéndose tres años después que el rector debía ser elegido por el claustro y posterior aprobación del gobierno nacional. El claustro estaba integrado por todos los doctores, licenciados y maestros graduados en ella, más el obispo de la diócesis (Molina, 2014).

En el año 1881, durante la presidencia de Julio A. Roca, la Universidad de Buenos Aires también fue nacionalizada, debido a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Pocos años más tarde, el Congreso de la Nación sancionó la ley 1597, mejor conocida como “Ley Avellaneda”, debiendo su nombre a que fue el autor de dicho proyecto el entonces expresidente de la Nación Nicolás Avellaneda, quien en ese entonces era rector de la Universidad de Buenos Aires, además de ser senador nacional por la provincia de Tucumán. La ley 1597 poseía solo tres artículos: el primero disponía que las universidades de Buenos Aires y Córdoba debían dictar sus propios estatutos con sujeción a las bases establecidas en sus siete incisos. A su vez, por su segundo artículo se determinaba que los estatutos dictados por los Consejos Superiores “con arreglo a las bases anteriores serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo”; mientras que por su tercer artículo se ordenaba que las designaciones de los profesores se harían por decretos del Poder Ejecutivo, “a propuesta de las facultades respectivas”. En el año 1895, por medio de la ley 3271 le fue agregado un artículo referido a los exámenes finales (3).

(3) Publicada en el Boletín Oficial del 05/10/1895.

III. La Universidad de La Plata en su etapa provincial

Pocos años después de la fundación de la ciudad de La Plata el entonces senador provincial Rafael Hernández presentó un proyecto de ley, juntamente con los senadores Emilio J. Carranza, Marcelino Aravena y Valentín Fernández Blanco, cuyo objeto era disponer la creación de una universidad de carácter provincial.

Se pretendía que dicha Casa de Altos Estudios fuera radicada en la ciudad de La Plata, que ya era la nueva capital de la Provincia de Buenos Aires. Justamente esta provincia, luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires –hecho acaecido luego de la sanción de la ley nacional 1059– había perdido la mayor parte de las instituciones que se concentraban en esa ciudad, entre ellas la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto, luego de un muy interesante debate, fue aprobado en el Senado de la provincia por unanimidad el día 6 de agosto de 1889, y luego fue remitido a la Cámara de Diputados. En esta Cámara se hizo lugar a la moción del diputado Rodolfo Moreno, y de esta manera se dispuso su inclusión en las sesiones extraordinarias de ese año. Finalmente la Legislatura aprobó la ley el día 27 de diciembre de 1889, siendo promulgada el 2 de enero de 1890 por el gobernador Máximo Paz, bajo el número de ley 2333 (4).

La ley 2333 establecía:

Artículo 1º: Erígese una Universidad de estudios superiores en la capital de la provincia, la cual se compondrá de un Rector, un Consejo Superior, una Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, una de Ciencias Médicas, una de Ciencias Físico-Matemáticas, una de Química y Farmacia y las que en adelante se crearen. Tendrá además una Asamblea Universitaria formada por los miembros titulares de todas las Facultades.

A su vez, por medio del artículo 2º de dicha ley se determinaba que esta nueva universidad iba a dictar sus estatutos y planes de estudios respetan-

(4) Índice de las leyes de la Provincia de Buenos Aires (T. II, p. 853), Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, La Plata.

do lo dispuesto en ley nacional 1597, “para las Universidades de Buenos Aires y Córdoba, como así también a tenor de lo dispuesto en el artículo 214(5) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

A su vez por el artículo 6º se autorizaba al Poder Ejecutivo a que llevara a cabo las gestiones con el objeto de que sean reconocidos por la Nación “los diplomas universitarios y certificados expedidos por las respectivas facultades”. El siguiente artículo disponía que el Poder Ejecutivo debía nombrar a los profesores titulares, designando las respectivas cátedras. En el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, seis eran los profesores titulares

(5) El artículo 214 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1889 (actual artículo 205) determinaba las reglas a las que se ajustarían las leyes orgánicas y reglamentarias de la instrucción secundaria y superior:

1. La instrucción secundaria y superior estarán a cargo de las Universidades que se fundaren en adelante.
2. La enseñanza será accesible para todos los ciudadanos de la Provincia y gratuita con las limitaciones que la ley establezca.
3. Las Universidades se compondrán de un Consejo Superior presidido por el rector y de las diversas facultades establecidas en aquellas por las leyes de su creación.
4. El consejo universitario será formado por los decanos y delegados de las diversas facultades, estas serán integradas por miembros *ad honorem* cuyas condiciones y nombramiento determinará la ley.
5. Corresponderá al consejo universitario: dictar los reglamentos que exijan el orden y la disciplina de los establecimientos de su dependencia; la aprobación de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la sanción legislativa; la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las leyes y los reglamentos le acuerden y la decisión en última instancia de todas las cuestiones contenciosas decididas en primera instancia por una de las facultades; promover el perfeccionamiento de la enseñanza; proponer la creación de nuevas facultades y cátedras; reglamentar la expedición de matrículas y diplomas y fijar los derechos que puedan cobrarse por ellos.
6. Corresponderá a las facultades: la elección de decano y secretario; el nombramiento de profesores titulares o interinos; la dirección de la enseñanza, formación de los programas y la recepción de exámenes y pruebas en sus respectivos ramos científicos; fijar las condiciones de admisibilidad de los alumnos; administrar los fondos que les corresponden, rindiendo cuenta al consejo; proponer a este los presupuestos anuales y toda medida conducente a la mejora de los estudios o régimen interno de las facultades.

La obligación, por parte del Estado provincial, de sostener la Universidad, había sido terminantemente establecida en el artículo 212 de la Constitución: “La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de educación común y organizará asimismo la instrucción secundaria y superior y sostendrá las universidades, colegios e institutos destinados a dispensarlos”.

que iban a ser nombrados en esta primera etapa. Estos profesores luego de tomar posesión de sus respectivos cargos integrarían la primera Asamblea Universitaria encargada de la elección del rector.

Debido a la crisis económica que tuvo inicio en el año 1889, y cuyos efectos se profundizaran en el año siguiente (6), fue postergado el efectivo inicio de las actividades de la universidad provincial con sede en La Plata.

Finalmente en 1897 el entonces gobernador Guillermo Udaondo, en acuerdo general de ministros, suscribió un decreto el día 8 de febrero de 1897 fundado en “lo prescripto por el artículo 214 de la Constitución y las disposiciones de la ley citada”, ordenó la puesta en funciones de la Universidad. En los *considerandos* también se expresaba que

(...) estando ordenada por ley de enero 2 de 1890 la creación de una Universidad en esta capital, y habiéndose producido en favor de su fundación repetidas manifestaciones de opinión que demuestran la existencia en la Provincia y en esta ciudad, de una necesidad pública que el establecimiento de aquella institución viene a satisfacer.

A tenor de la autorización legislativa el gobernador Udaondo dictó un decreto por el que se establecían las distintas facultades, como así también a los profesores que iban a integrar la primera “Asamblea Universitaria” y la creación del “Consejo Superior y Facultades”. Así por el artículo 1º se determinó que los doctores Dardo Rocha, Dalmiro Alsina, José M. Calderón, Jacob Larrain, Ricardo Marcó del Pont y Adolfo Lascano iban a representar a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ante esta primera Asamblea Universitaria.

Finalmente por los artículos 3º a 5º se determinaba la necesidad de su puesta en funcionamiento en locales de la provincia, y que luego de que fueran aprobados los estatutos definitivos, iba a solicitarse a la Nación el reconocimiento de los títulos y diplomas expedidos por las distintas facultades, en cumplimiento de lo previsto en el entonces artículo 67 inciso 16 –actual 75 inciso 18– de la Constitución Nacional.

(6) Esta crisis económica, sumado a la Revolución de Julio de 1890, produjo la renuncia del entonces presidente de la Nación, Miguel Juárez Celman.

De esta forma el día 14 de febrero de 1897, los miembros elegidos por el gobernador se reunieron en Asamblea en la sala de la Presidencia del Senado, y eligieron al Dr. Dardo Rocha por unanimidad como su primer rector. Luego de esto, a propuesta del flamante rector, se determinó que la nueva institución se iba a denominar “Universidad de La Plata”. También se aprobó el proyecto de escudo con la siguiente alegoría: “La Ciudad de La Plata elevando la luz de la ciencia, bajo la constelación de la Cruz del Sud y guardando el escudo de la Provincia de Buenos Aires”. En su centro y derredor se dispuso esta leyenda: “Por la Ciencia y por la Patria”.

El Consejo Superior de la nueva universidad resolvió que el acto inaugural iba a llevarse a cabo el día 18 de abril de 1897. Para este evento, fueron especialmente invitados los rectores de las universidades de Córdoba y de Buenos Aires (Gandolfi, 1997, p. 43).

Después de lo expuesto, fueron designados los decanos de las cuatro facultades. En el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, esta responsabilidad recayó en el Dr. Dalmiro Alsina (7). Por su parte, en la Facultad de Ciencias Médicas fue designado el Dr. Celestino S. Arce, en la de Ciencias Físico-Matemáticas el ingeniero Julián Romero y, finalmente, quedó a cargo de la Facultad de Química y Farmacia, el Dr. Pedro J. Pando.

Dalmiro Alsina cuando culminó su mandato como primer decano de la entonces reciente Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad (8), fue designado, previo acuerdo del Senado provincial, en primer término como procurador de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y luego como juez del Máximo Tribunal de Justicia provincial (9).

(7) Tatarabuelo del aquí autor de estas líneas (abuelo paterno de mi abuela por parte de mi padre. Dalmiro Alsina era sobrino de Valentín Alsina y primo de Adolfo Alsina).

(8) En el aula Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, en la época en la que todavía funcionaba esta unidad académica en el entonces edificio denominado “Tres Facultades”, hoy llamado “Sergio Karakachoff”, lucía una foto y una placa alusiva del Dr. Dalmiro Alsina.

(9) Agregó como mera curiosidad, que en su condición de presidente de la Suprema Corte, le tocó intervenir ante una presentación efectuada por la primera abogada recibida en nuestro país, la señorita María Angélica Barreda. La abogada Barreda se graduó en la Universidad Nacional de La Plata, el 21 de diciembre de 1909. Retiró su diploma (firmado por Joaquín V. González y Rodolfo Rivarola) de manos del presidente de la UNLP en la misma sala de la Presidencia, el 28 de diciembre de 1909. La abogada Barreda luego de

IV. Nacionalización de la Universidad de La Plata

IV.1. Crisis económica de la universidad provincial

La universidad, bajo la jurisdicción provincial, comenzó a tener graves problemas económicos, debido a que los ingresos por alumnos –tégase en cuenta que los estudios eran arancelados– no alcanzaban para financiar los gastos operativos de la nueva institución. A la situación descripta, se sumó la decisión de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires del día 29 de enero de 1903, por la que se dispuso suprimir la subvención económica de la que era beneficiaria la Universidad. El Consejo Superior decidió la presentación de una demanda originaria de inconstitucionalidad contra esta decisión del Poder Legislativo, pero la misma se tornó abstracta, atento a que fue restablecida la partida presupuestaria para la Universidad.

No obstante lo expuesto, empezó a haber negociaciones para que esta universidad pasara a depender del Estado Nacional. Es decir, más allá de la voluntad de las autoridades, del cuerpo docente y del alumnado, los problemas de carácter económico justificaron la necesidad de su nacionalización. Para ese entonces el Poder Ejecutivo de la Nación ya había dictado dos decretos (10), por los que se había reconocido la validez de los diplomas universitarios emitidos por la Universidad de la Plata, todavía en la órbita provincial.

presentarse ante la mesa general de entradas de la Suprema Corte para matricularse, le fue denegada esta pretensión. Se le manifestó que no estaba previsto que las mujeres pudieran ejercer esta profesión. Ahí fue el momento en que los jueces de la Suprema Corte de Justicia provincial en pleno intervinieron, y en fallo dividido y con el voto en primer término del juez Dalmiro Alsina en su condición de presidente de este Alto Tribunal propuso hacer lugar a esta presentación, utilizando fundamentos de avanzada para esa época, basado en el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Recuérdese que aún regía el texto originario del Código Civil de Vélez Sarsfield por el que se disponía que las mujeres poseían una suerte incapacidad de carácter relativo, que se reflejaba, por ejemplo, en no poseer para ese entonces derecho al sufragio. Por lo tanto, la Suprema Corte hizo lugar a la pretensión, y se convocó a María Angélica Barreda a primera audiencia, a efectos de prestar juramento como abogada, frente al presidente de dicho cuerpo, el Dr. Dalmiro Alsina. (Conforme Leiva, Alberto D., 2012). La matriculación de la primera abogada argentina: María Angélica. *Prudentia Iuris*, 74. Recuperado de <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/matriculacion-primera-abogada-argentina.pdf> [Fecha de consulta: 08/08/2018].

(10) Decretos PEN de fecha 25 de enero de 1900 y 15 de enero de 1902, respectivamente.

IV.2. Traspaso de la Universidad de La Plata a la Nación

Lo expuesto en los párrafos anteriores generó el convencimiento de la inviabilidad de esta Universidad en el ámbito provincial. Una de las posibilidades concretas era el cierre definitivo y que los alumnos culminaran sus estudios en la pujante Universidad de Buenos Aires. Para ello, en el ámbito de la Legislatura se propuso un sistema de becas y viáticos para facilitar el traslado de estos alumnos hacia la Capital Federal.

Aparece aquí en forma “providencial” la figura de Joaquín Víctor González, en su condición de ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Manuel Quintana:

(...) quien dotó a la operación de nacionalización de la Universidad de La Plata de un sentido ideológico pleno, al incorporarse a este proceso en 1905 como Ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Manuel Quintana (Crispiani, 1997, p. 61).

González, nacido en la Provincia de La Rioja, era uno de los más importantes intelectuales de esa generación, sea por su obra literaria como así en su condición de catedrático del Derecho Constitucional. A ello se suma su destacada y dilatada carrera política (11).

Ya en su clásico *Manual de la Constitución argentina*, Joaquín V. González sostenía que el mandato que surgía del entonces artículo 67 inciso 16 de la Constitución Nacional (“el progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria”), cláusula que sigue vigente, comprendía:

todos los derechos que el Gobierno Federal tiene sobre la dirección, vigilancia y estímulo general de la enseñanza, así privada como pública, a los efectos de disponer a los jóvenes a seguir los altos estudios y desarrollo ilimitado de las ciencias (...) estos

(11) Nacido en La Rioja en 1863, abogado recibido en la Universidad de Córdoba, fue gobernador de su provincia natal, diputado de la Nación, senador nacional, ministro del Interior durante la segunda presidencia de Julio A. Roca, ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Quintana y de Figueroa Alcorta, miembro de la Real Academia Española y miembro permanente de la Corte permanente de La Haya, entre otras elevadas responsabilidades.

últimos constituyen la ‘instrucción superior,’ que se adquiere en las universidades, las que se componen de facultades, según las principales divisiones de los conocimientos a que se dirige la inteligencia (González, 1935, p. 166).

Joaquín V. González se hizo cargo personalmente de las negociaciones entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires respecto al traspaso de la Universidad de La Plata. Entendía González que la “Nueva Universidad” debía exceder la mera formación profesional, es decir, una casa de estudios donde solo se expidieran títulos. Debía ser una fuente generadora de cultura universal, de saberes y de investigación científica. Debía, por lo tanto, diferenciarse de los modelos universitarios de Córdoba y Buenos Aires, que en cuyo seno, por sus propias características particulares resultaba dificultoso llevar a cabo nuevas prácticas y experiencias. El desafío era lograr la transformación de las concepciones dogmáticas y abstractas, en un ámbito de observación y experiencia. De esta forma, la Universidad de La Plata debía ser un verdadero centro de promoción y transformación de la forma de enseñar saberes y de investigación científica, es decir, un enorme laboratorio de ciencia, técnica e ideas, donde germinara un espíritu apto para los desafíos del siglo XX, para ese entonces recién comenzado.

De esta forma, el Congreso de la Nación, sancionó la ley 4699 por la que se aprobó el convenio suscripto entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, y de esta manera se dispuso el traspaso de la Universidad de La Plata, de carácter provincial, a la Nación. Por medio de la ley provincial 2927 (12) se aprobó esta cesión a título gratuito.

Fueron traspasados, también en esta etapa, el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, la Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires, el edificio del Banco Hipotecario y el resto de inmuebles y muebles de la Universidad de La Plata. También se hizo lo propio con casi veinte hectáreas ubicadas entre las calles 47 a 50 y de 1 hasta las vías del ferrocarril, para que allí se erigiera el Colegio Nacional y varios edificios para la “Universidad Nueva”.

(12) Índice de las leyes de la Provincia de Buenos Aires (1962) (T. II, p. 867), *Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires*, La Plata.

Debidamente autorizado por el Consejo Superior Universitario (aún provincial) el Dr. Enrique E. Rivarola, en su condición de depositario de los bienes, efectuó la entrega el 27 de enero de 1906. Ya el 24 de enero de este mismo año el titular del Poder Ejecutivo Nacional había firmado un extenso decreto por el que se estableció la organización, presupuesto y planes de estudio de la nueva Universidad.

Respecto al Museo de Ciencias Naturales de La Plata –que es preexistente a la creación de la Universidad provincial– el todavía ministro de Justicia e Instrucción Pública, Dr. Joaquín V. González, designó a los Sres. Dr. Samuel A. Lafone Quevedo y Dr. Enrique Herrero Ducloux para que en nombre y representación del Poder Ejecutivo Nacional y con las formalidades del caso, procedan a recibir y tomar posesión de dichos establecimientos y bienes enumerados en el artículo 1º del citado convenio-ley de fecha 12 de agosto de 1905.

De esta forma al Dr. Enrique Herrero Ducloux(13), se le dio por misión hacer del Instituto de Química un centro de enseñanza profesional de ex-

(13) Enrique Herrero Ducloux era el bisabuelo del autor de estas breves líneas. Para clarificar, era el abuelo paterno de mi padre. En 1901 se convirtió en el primer doctor en química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, donde poco después ejercería la docencia. Su tesis doctoral fue aprobada el 26 de noviembre de 1901, razón por la cual, en la Argentina, se celebra en dicha fecha el Día del Químico. El premio “Dr. Enrique Herrero Ducloux” se otorga por la Asociación Química Argentina, anualmente, a la mejor tesis aprobada en los dos años anteriores a la convocatoria del concurso, realizada en el país por un alumno de las universidades nacionales o privadas. La Facultad de Química y Farmacia de la UNLP dispuso que en el “Edificio Enrique Herrero Ducloux” funcionen el Decanato, Área Administrativa y también se desarrollan actividades docentes y de investigación.

Su biografía se encuentra publicada en la Real Academia de Historia, en cuyos párrafos se lee que “(...) De esta forma fue puesta en marcha la Escuela de Química y Farmacia, siendo Enrique Herrero Ducloux en 1906 profesor titular de la misma, ocupando también el cargo de vicedirector del Museo, como así profesor titular de la Facultad de Agronomía. También fue vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (1913-1916). En 1912 fundó la Sociedad de Química Argentina, de la que fue primer presidente y primer director de su revista *Anales* (...). En 1909, y por su insistencia, la Escuela pasó a Facultad autónoma, la Facultad de Química y Farmacia, de la que fue elegido primer decano, siendo aquella la primera en el país con estas dos especialidades, perteneciendo a la Universidad de la Plata, cuyo emblema, la hoja de roble, fue diseñado por el propio H. Ducloux. A partir de 1923 la Facultad expediría títulos de doctor en Química, en Química y Farmacia, perito químico y farmacéutico. En 1924 Herrero Ducloux fue el presidente del primer Congreso

celencia, apto también para la investigación científica, donde florezca la cultura y se desarrolle la extensión universitaria. La organización del Instituto de Química se inicia con gran impulso y rapidez, y su titular, luego de haber sido debidamente diligenciado, obtuvo del Ministerio de Instrucción Pública un laboratorio completo de química general, como así también se consiguió la debida autorización para solicitar a Europa la provisión de instrumental y distintos materiales con destino a los diferentes laboratorios de la Escuela (Sagastume, 1944).

La “Universidad Nueva”, tal su denominación doméstica, tuvo como objeto alcanzar y abarcar todas las etapas educativas, lo que incluía la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, como así también la investigación científica.

La Universidad Nacional de La Plata fue estructurada, en esta primera etapa, por medio de distintas carreras, a saber: Facultad de Agronomía y Veterinaria; Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y, por último, la Facultad de Ciencias Naturales.

Por otra parte, se contaba con dos institutos de investigación: el Museo de Ciencias Naturales, y el Observatorio Astronómico, además de la Escuela Agraria Experimental de Santa Catalina.

Por una cuestión que responde a mi propio interés personal, y a tantas conversaciones de sobremesas que presencié en el seno de mi familia, dentro del amplio espectro que poseía la Universidad Nacional de La Plata, me detendré en el Instituto del Museo de Ciencias Naturales.

Así, por medio del decreto del 7 de febrero de 1906, fueron designadas las nuevas autoridades del Instituto del Museo y los primeros profesores de la Escuela de Química y Farmacia, siendo su director el Dr. Samuel A. Lafone Quevedo y su vicedirector el Dr. Enrique Herrero Ducloux, quien estaba

Sudamericano de Química, y en 1945 fue elegido presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (1945) (...). Recuperado de <http://dbe.rah.es/biografias/11956/enrique-herrero-ducloux>. Se puede ampliar en la página web de la “Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”. Recuperado de: <http://www.ancefn.org.ar/institucional/ducloux.html> o en Wikipedia o en la Enciclopedia Espasa Calpe.

a cargo de la Escuela de Química y Farmacia. Dentro de los académicos de esa institución se encontraba Florentino Ameghino. Ellos tenían el difícil desafío de ocupar el lugar de Francisco Pascasio Moreno –el Perito Moreno– fundador y por muchos años director del Museo de La Plata.

La excelencia y la calidad que entonces poseía el Instituto del Museo de Ciencias Naturales de La Plata se reflejaba en los calificados científicos que allí prestaban servicios. Así, dentro del campo de la geología, estaba integrado por los Dres. Santiago Roth, Luis Brackerbush, Carl Burdckhardt, Guillermo Bodenbender, Avé Lallement y Rudolf Hauthal, algunos de los cuales habían sido discípulos del célebre Germán Burmeister. En las ciencias biológicas se destacaban Federico Kurtz, Carlos Spegazzini (14), Eduardo Holmberg, Pablo Lorentz y Ángel Gallardo; dentro de la antropología había investigadores de la talla de Herman Ten Kate, Roberto Lehmann-Nitsche, Samuel Lafone Quevedo, Adán Quiroga, Juan Bautista Ambrosetti; y en química, Adolfo Doering, Friedrich Schickendantz, Federico Arata, Juan José Kyle, Luis Harperath y Miguel Puiggari. Todos prestigiosos profesionales, varios de ellos con fama mundial, que dieron lustre a la investigación y la docencia en nuestro país desde el Museo de La Plata (15).

Para que se advierta la dimensión que se pretendió dar a la investigación, difusión y enseñanza de la ciencia, en el Observatorio Astronómico de la Universidad de La Plata fueron contratados los profesores William Hussey y a Bernhard Dawson, ambos astrónomos norteamericanos. El primero había sido director del Observatorio de la Universidad de Michigan. El Dr. Hussey, de esta forma, dirigió el Observatorio Astronómico de La Plata hasta 1914, siendo luego reemplazado por Dawson. Este último se nacionalizó argentino, y falleció en nuestro país en el año 1960. En el año 1970 se dispuso que un cráter de la luna llevara su nombre, al igual que un asteroide.

Para finalizar esta digresión que me permito, años más tarde, el Dr. Rodolfo Rivarola –ya en su condición de sucesor de González en la Presidencia de la Universidad– presentó al Consejo Superior un proyecto de orga-

(14) El Instituto de Botánica de La Plata lleva el nombre del Dr. Carlos Spegazzini, y su colección de más de 4.000 especies, su instrumental y su propia casa fue legada por el mismo a la Universidad.

(15) Pueden ser leídas las muy interesantes biografías de los aquí mencionados por medio de los buscadores de internet.

nización del Museo y creación del Instituto de Química. Se votó y resolvió denominarla “Facultad de Ciencias Químicas”. Esta resolución, luego de su aprobación, fue elevada al Poder Ejecutivo, quien dictó el decreto de fecha 7 de octubre de 1919(16). De esta forma, el 25 de octubre de ese año se constituyó en el anfiteatro del Museo la Asamblea de profesores de la Escuela de Química y Farmacia con la presencia del propio presidente de la Universidad, con el objeto de elegir las autoridades de la Facultad de Química y Farmacia recientemente creada. Por unanimidad de votos resultó electo decano el Dr. Enrique Herrero Ducloux. “Al primer doctor en química diplomado en el país, le correspondió legítimamente el honor de ser el primer decano de la primera Facultad de Química y Farmacia de la República” (Sagastume, 1944).

En lo que se refiere a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales durante este período nos recuerda el Dr. Mayón:

(...) que el brillo, empuje y espíritu innovador que le otorgó Joaquín V. González a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales continuó en los primeros años posteriores a él y en los que siguieron. Así fue que esta Facultad contó con los más eminentes maestros del Derecho: Rodolfo Rivarola, Agustín Álvarez, José Nicolás Matienzo, Emilio Ravigani, José Peco, Alfredo L. Palacios, Juan A. González Calderón, Miguel Marienhoff, César Díaz Cisneros, Carlos Sánchez Viamonte, Bartolomé Fiorini, Gastón

(16) El decreto del Poder Ejecutivo Nacional del día 7 de octubre de 1919 establecía lo siguiente: “Vista la ordenanza sancionada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, por la que se separa la Escuela de Química y Farmacia, del Instituto del Museo y se crea sobre la base de ella la Facultad de Ciencias Químicas, de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 7º y 10 del Convenio del 12 de agosto de 1905, aprobado por la ley 4699 y lo dictaminado al respecto por el Sr. Procurador General de la Nación, el PE de la Nación decreta: Apruébase la ordenanza de que se trata, en la siguiente forma: Artículo 1º: Sepárase del Instituto del Museo, la Escuela de Química y Farmacia, que funcionará en lo sucesivo como Facultad de Ciencias Químicas y comprenderá además de los propios cursos que tiene actualmente, la enseñanza superior de química en toda la Universidad. Artículo 2º: La nueva Facultad otorgará los diplomas de Doctor en Química y Farmacia, Perito Químico, Farmacéutico y los que se creen en adelante, dentro de las condiciones establecidas en la ley y los estatutos. Artículo 3º: Autorízase al Sr. Presidente de la Universidad para convocar la primera Asamblea de Profesores, a efectos de la elección de sus autoridades, de acuerdo con la ley y los estatutos. Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, etc. - Firmado: Yrigoyen - Salinas”.

Tobal, y tantos otros que fueron verdaderos capítulos de gloria para las ciencias jurídicas y sociales de la Argentina. Y también enseñaron en su aulas personalidades internacionales como Adolfo Posada, Enrique Ferri, Santiago Sentís Melendo, Luis Jiménez de Asúa (Mayón, 2005, p. 20).

Como se advierte, fue sumamente relevante y destacada la labor desempeñada por Joaquín V. González en tan pocos años, estableciendo una universidad científica de primer nivel, que lejos de haberse opacado por la presencia tan cercana de la Universidad de Buenos Aires, no solo no sufrió su sombra, sino que fue un verdadero faro para la enseñanza y la ciencia. Esta Universidad fue importante para nuestro país, pero también para toda América, donde familias caracterizadas de estos países enviaban a sus hijos a educarse en nuestro país, enviándolos a las distintas unidades académicas que conformaban nuestra Universidad Nacional de La Plata.

V. La Reforma Universitaria

V.1. Contexto político nacional e internacional

Mientras tanto, se fueron sucediendo importantes acontecimientos en la República Argentina y en el mundo. Ya en el siglo anterior, se habían desarrollado relevantes hechos políticos, signados por luchas e intentos de revoluciones. En este terreno se habían destacado muy valiosos argentinos, pudiendo citar a Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, y el joven Hipólito Yrigoyen, entre otros muchos líderes de esta nueva generación. Su lucha se centraba en varios objetivos democráticos y republicanos, tales como que se pusiera fin al fraude electoral y al “voto cantado”, como así a las proscripciones políticas. De esta forma pretendían que se permitiera el ingreso a la vida cívica en forma real y efectiva a una nueva camada de argentinos, muchos de ellos hijos de inmigrantes que habían arribado a nuestro país en razón de la invitación prevista en el Preámbulo, y de los estímulos establecidos en los artículos 20 y 25 de la Constitución Nacional.

Esta época coincide con el surgimiento de partidos políticos de carácter moderno, en especial el socialismo y el radicalismo. Estos nuevos partidos constituyeron vías de acceso a la vida pública de los nuevos sectores sociales que exigían espacios de participación política.

Aquí aparece nuevamente Joaquín V. González como protagonista, impulsando la nueva ley electoral del año 1902, sancionada cuando el ilustre riojano se desempeñaba como ministro del presidente Julio A. Roca. Por medio de esa ley electoral se había dispuesto el sistema de circunscripciones uninominales, es decir, que la ciudadanía debía elegir a un diputado por distrito o circunscripción. También se determinó la edad mínima de dieciocho años de edad para votar. El padrón electoral, a su vez, iba a coincidir con los listados de enrolamiento militar, razón por la cual votaban solo los argentinos varones. También dicha norma electoral habilitaba a los partidos políticos a que pudieran fiscalizar el desarrollo del acto electoral. Suele asociarse a esta ley electoral con el arribo al Congreso de la Nación del “primer diputado socialista de América”, el Dr. Alfredo Palacios.

A estas iniciativas políticas, se le debe sumar la ley 4144 denominada “Ley de Residencia”, sancionada también en 1902, por la cual se podía expulsar de nuestro país a extranjeros en forma sumaria.

También el Dr. Joaquín V. González –siempre bajo la presidencia de Julio A. Roca– fue el que elaboró y propuso el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, objetivo en el que colaboraron destacadas personalidades, varios de ellos con ideas políticas que no coincidían con el pensamiento entonces oficialista, por ejemplo Enrique del Valle Iberlucea, José Ingenieros y Octavio Bunge.

Continuadas las luchas, estos reclamos y exigencias políticas finalmente fueron atendidos en el año 1912, oportunidad en la que el Congreso de la Nación sancionó la ley 8871, denominada “Ley Sáenz Peña”. Por dicha ley se estableció el sufragio con carácter universal, secreto, igual y obligatorio.

La promulgación de la ley 8871 de “Régimen Electoral” tuvo lugar el 13 de febrero de 1912, y produjo el acceso al poder por primera vez de la Unión Cívica Radical, y por su intermedio a una nueva generación, con Hipólito Yrigoyen a la cabeza. La ley “Sáenz Peña” le significó a toda una camada de dirigentes pasar definitivamente al ostracismo político, paradójicamente los mismos que votaron y sancionaron esta revolucionaria reforma al sistema electoral, cuya significación fue valiosamente reconocida por el presidente Roque Sáenz Peña, al momento de promulgar esta ley.

Dijo Sáez Peña:

De hoy en más habrá, naturalmente, vencedores, pero ya no habrá vencidos, porque los más y los menos serán parte en la función gubernativa.

Sean los comicios próximos y todos los comicios argentinos, escenarios de luchas francas y libres, de ideales y de partidos. Sean anacronismos de imposible reproducción tanto la indiferencia individual como las agrupaciones eventuales, vinculadas con pactos transitorios. Sean, por fin, las elecciones la instrumentación de las ideas. He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera votar (Sáenz Peña, 1914).

En 1916, haciendo uso de la ley electoral antes citada, fue elegido Hipólito Yrigoyen como presidente de la Nación, cerrándose, en cierta forma el ciclo de luchas que iniciaran aquellos jóvenes en el siglo anterior.

Gabriel del Mazo (17), testigo y protagonista fundamental de este período histórico, quien será citado en varias oportunidades en el presente trabajo, sostuvo en 1968 que

Durante un siglo, la representación popular en los gobiernos de nuestras naciones había sido nominal, pero a partir de la mencionada 'reforma política argentina' fue estableciéndose sucesivamente, aunque con toda clase de alternativas, esa dimensión fundamental del gobierno democrático. Estas innovaciones políticas, desde 1912/16 en la Argentina (...) movilizaron las posibilidades económicas sociales populares, y por esa vía ascendente, las educativas de los ciclos que conducen a la Universidad. En

(17) Gabriel del Mazo, nacido en la ciudad de Buenos Aires en el año 1898, era en 1918 estudiante de ingeniería de la UBA, unidad académica en al que egresó con el título de ingeniero. Fue uno de los dirigentes estudiantiles más importantes de esta época, llegando a ser elegido por sus pares como presidente de la Federación Universitaria Argentina. Siempre se desenvolvió como dirigente de la Unión Cívica Radical, fue legislador, ministro de la Nación durante la presidencia de Frondizi, convencional nacional constituyente en el año 1949, y miembro fundador de FORJA. Fue docente universitario y llegó a ser vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata.

el nuevo ámbito prosiguió o se instauró en todos sin excepción, los países latinoamericanos, el desarrollo de las nuevas bases universitarias argentinas dadas en 1918 (del Mazo, 1968).

A este panorama se sumaba el desarrollo de la denominada “Primer Guerra Mundial” iniciada en 1914, que iba a culminar cuatro años después. Además, en 1917 tuvo lugar la revolución bolchevique en la Rusia zarista. Estos hechos produjeron, en el plano interno, que Europa dejara de ser un ejemplo o un espejo en el cual esa generación de argentinos quería verse reflejada. De ahí que surgiera la necesidad de adoptar modelos de carácter vernáculo, y este cambio de paradigma también se produjo en el modelo de universidad. Comenzó a hablarse de un modelo americano de universidad. Asimismo, en lo que respecta a su gobierno, se exigió la participación de los estudiantes en determinadas decisiones. Del Mazo sostuvo que luego de la Gran Guerra:

(...) sobrevino en la juventud estudiosa y en el espíritu general de nuestro pueblo, una conmoción violenta. La no participación de la República en la guerra permitió ver claramente su drama, y en orden intelectual, estimar que era ya inconcebible seguir concediendo magisterio a tal civilización (...) (del Mazo, 1968).

V.2. La denominada “Reforma Universitaria” y su incidencia en La Plata

Joaquín V. González culminó su mandato a cargo de la Presidencia de la Universidad a principios de 1918, siendo reemplazado, tal como se expresara párrafos antes, por Rodolfo Rivarola.

En lo que se refiere al origen de la “Reforma Universitaria”, la misma tuvo lugar en la Universidad de Córdoba. Los alumnos de las tres facultades de esa universidad declararon la huelga general a comienzos de 1918.

El 21 de junio de 1918 aparece el *Manifiesto Liminar* de la Federación Universitaria de Córdoba, redactado por Deodoro Roca, denunciando al régimen universitario de anacrónico y exigiendo una reforma radical del mismo. El escenario cordobés dejó de ser exclusivo extendiéndose los reclamos a las Universidades de La Plata y Buenos Aires, y las dos provinciales existentes: Tucumán y Santa Fe. Se destacaron las exigencias de los

alumnos: una universidad democrática y nacional, al servicio de América y su cultura (del Mazo, 1976, p. 83).

Este movimiento, rápidamente contó con la simpatía y el apoyo del estudiantado de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata. En esta última entidad académica, la Federación Universitaria de La Plata editó un boletín con el fin de reflejar lo que estaba sucediendo en Córdoba y transmitir su apoyo.

De esta forma ese primer número editado por la Federación Universitaria de La Plata promovió la huelga en solidaridad con sus pares cordobeses, resolviendo “declarar público apoyo a la actitud franca y valiente de la Federación Universitaria de Córdoba” y convocar a la huelga general universitaria en todas las facultades, institutos y colegios de la Universidad Nacional de La Plata, durante los días 19 y 20 de junio.

El nuevo rector de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Rivarola, decidió no tomar asistencia esos días, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. El día 19 de junio se llevó a cabo un gran acto de estudiantes universitarios de nuestra ciudad, en el que el joven Amílcar Mercader hizo uso de la palabra.

El día 11 de abril de ese año se había fundado la Federación Universitaria Argentina, en cuya reunión inaugural se aprobó la convocatoria al Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios. La Federación Universitaria Argentina estaba integrada por delegados de las tres universidades nacionales y de las dos aún provinciales –Tucumán y del Litoral–. Fue en esta oportunidad en la que se habló de una “Universidad Nueva”: “la universidad es una comunidad constituida por todos sus miembros, y son miembros de la universidad los profesores, los estudiantes y los graduados vinculados (...) de esa comunidad surgirá el gobierno”, diría Gabriel del Mazo (18) más de cincuenta años después de los hechos que se están relatando. Agregó que “esa fue en 1918 la fórmula pedagógica y democrática de la Universidad Nueva” (del Mazo, 1976, p. 83).

Se dispuso la intervención de la Universidad de Córdoba, y a tal fin el presidente Yrigoyen designó como interventor al Dr. José Nicolás Matien-

(18) Gabriel del Mazo fue elegido en el año 1920 presidente de la Federación Universitaria Argentina, reemplazando a Julio V. González.

zo (19), quien en ese entonces ostentaba el cargo de procurador general de la Nación. Luego de esta medida fue suspendida la huelga estudiantil. Matienzo –que ya tenía la experiencia de haber sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata– intentó democratizar esa universidad, declarando la caducidad de todos los cargos jerárquicos, y habilitando estatutariamente a los profesores para la elección de decanos y consejeros, y a estos para designar al rector.

Mientras tanto una creciente presión ejerció el movimiento estudiantil sobre el presidente de la Universidad Rodolfo Rivarola. Este descontento se vio reflejado en huelgas, tomas de edificios, intervención de la policía y de la Justicia Federal. La gravedad de los hechos mereció que tomara cartas en el asunto el ministro de Justicia e Instrucción Pública José Salinas y hasta el propio presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen.

El movimiento reformista buscaba que la universidad no esté integrada institucionalmente solo por los profesores, sino también por parte de los estudiantes y los graduados; que la asistencia a clases teóricas sea libre; que exista periodicidad y libertad en las cátedras, como también la docencia libre; que se haga efectiva la extensión universitaria; que el ingreso sea irrestricto con la sola condición de la idoneidad.

Muchos fueron los jóvenes que protagonizaran este movimiento estudiantil, destacándose Enrique Barros, Ismael Bordabehere, Ernesto Garzón, Amílcar Mercader, Horacio Valdés, Gabriel del Mazo, Héctor Ripa Alberdi, Osvaldo Loudet, Saúl Taborda, Arturo Capdevila, Arturo Orgaz, entre otros.

(19) José Nicolás Matienzo fue un gran hombre del derecho, que brilló en las cátedras universitarias, como así también en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Tuvo también una destacadísima carrera política. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata fue profesor de la Cátedra de Derecho Civil y de Derecho Constitucional, disciplina esta última sobre la cual escribió importantísimas obras que al día de hoy son recomendadas a los estudiantes para su lectura y estudio, en especial las “Lecciones de derecho constitucional”, en dos tomos, versión taquigráfica de sus clases en la Universidad de La Plata, tomadas por Juan Isaac Cooke. En el año 1913 fue designado como decano de nuestra facultad hasta el año 1918. Por último, recuerdo que Matienzo fue juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y procurador general de la Nación y presidente de la Academia Nacional de Derecho Ciencias Sociales de Buenos Aires, entre otras relevantes responsabilidades.

Desde el punto de vista filosófico y pedagógico contaron con la inestimable colaboración y compromiso de Alejandro Korn.

Recién en 1920 se efectuaron las modificaciones a los Estatutos de la Universidad Nacional de La Plata, sobre la base de las propuestas elevadas por José Nicolás Matienzo. Este último había sido el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, y ya ostentaba la experiencia de haber sido interventor de la Universidad de Córdoba, tal como fuera expuesto. De esta forma, Matienzo intentó trasladar a nuestra ciudad los resultados obtenidos en la universidad mediterránea.

Finalmente renunció Rivarola, reemplazándolo en forma interina el vicepresidente de la Universidad, el Ing. Félix Aguilar, bajo cuyo mandato fueran aprobados por parte del Poder Ejecutivo el 26 de junio de este mismo año (Vallejo, 1997, p. 116).

Culminado el interinato de Aguilar, tuvieron lugar otras dos presidencias interinas: Rodolfo Senet (entonces decano de la Facultad de Ciencias de la Educación) y Agustín Candiotti (docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria). Este último convocó a la Asamblea general donde fue elegido como presidente el Dr. Carlos Melo, quien ocupara el cargo hasta el mes de abril de 1921, momento en el cual presentó su renuncia, debido a otro conflicto estudiantil. Luego se suceden otras dos presidencias interinas, hasta que finalmente fue elegido en noviembre de 1921, el Dr. Benito Nazar Anchorena, el cual acreditaba un breve paso como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a partir de 1920. Nazar Anchorena asumió el cargo en diciembre de 1921 por tres años, y una vez vencido este período fue reelegido por tres años más.

V.3. Significado de la reforma

La denominada “Reforma Universitaria”, como se está exponiendo, tuvo su origen en el movimiento estudiantil cuyos objetivos principales fueron, por un lado, la autonomía universitaria y, por el otro, el denominado “co-gobierno” de docentes, estudiantes y graduados, donde debía privilegiarse también la renovación de planes de estudio y de los métodos pedagógicos. A su vez, para profundizar la visión humanista y social, se estableció la necesidad de profundizar la “extensión universitaria”, y reconocer y auspiciar la existencia de los “centros de estudiantes”.

De esta forma, se fueron estableciendo en forma paulatina dos grandes columnas sobre las que descansa la universidad pública en la República Argentina: el principio de autonomía académica y la libertad de cátedras.

Que la universidad fuera *autónoma*, se entendía como la atribución y competencia de establecer y determinar sus propias normas y estatutos por los que debería regirse, no solo cada universidad, sino también las distintas facultades. Incluía la potestad de elegir a sus autoridades tanto de la propia universidad, como así de cada una de sus unidades académicas, donde debía, a su vez, ser designado el cuerpo docente sin interferencias externas.

Por su parte, la *libertad de cátedra* –la otra columna de la reforma– se identificaba como la libre exposición de ideas y posturas, que incluía a los métodos pedagógicos y de investigación.

En definitiva, estos principios no eran otros que los que se hallan en el propio origen de las universidades durante la Edad Media, toda vez que durante este período se buscó que las mismas logaran libertad e independencia frente al poder político, representado por el señor feudal (Marías, 1952, p. 149).

Cabe resaltar que la “Reforma Universitaria”, trascendió las fronteras de nuestro país, siendo adoptadas sus banderas no solo en países limítrofes, sino también en otras naciones de Latinoamérica.

VI. Consagración legislativa de la “autonomía universitaria” y en la Constitución Nacional de 1949

Más allá de los acontecimientos de 1918, expuesto en forma breve párrafos antes, formalmente la “Ley Avellaneda” 1597 estaba vigente, y rigió hasta el año 1947, año en el que fue sancionada la ley 13.031 (20). A diferencia de su antecesora, tenía una gran extensión –118 artículos– y regulaba todos los aspectos de la organización y el funcionamiento de las universidades nacionales de manera detallada y rigurosamente uniforme. Años más tarde, la ley 13.031 fue derogada en el año 1954, por medio de la ley 14.297 (21), durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.

(20) Sancionada el 26/09/1947 y publicada en el Boletín Oficial el 04/11/1947.

(21) Sancionada el 18/12/1954 y publicada en el Boletín Oficial el 18/01/1954.

Tanto la ley 13.031, como así su sucesora 14.297, proclamaban la autonomía. Así el artículo 12 de la ley 13.031 expresaba que las universidades contaban con “la autonomía técnica, docente y científica que se les confiere por la presente ley y con el pleno ejercicio de su personalidad jurídica” (22), y el artículo 69 de la ley 14.297 determinaba que “las universidades cuentan con autonomía docente y científica y gozan de la autarquía que en el orden administrativo les confiere la presente ley”.

Entre medio de ambas leyes, fue sancionada en marzo de 1949 la Constitución Nacional de dicho año. En el artículo 37 de esa Constitución se consagró expresamente la autonomía universitaria dentro de “los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento” (23).

Luego del golpe de estado de septiembre de 1955 el gobierno *de facto* dictó el decreto-ley 477/1955 por el que derogó la ley 14.297, ordenándose que retome su vigencia la ley 1597. También dispuso la intervención provisoria de las universidades.

VII. Gratuidad de la Universidad

Al lado de la autonomía universitaria, merece ser destacada la gratuidad de los estudios universitarios, decisión dispuesta por medio del decreto 29.337/1949 el día 22 de noviembre de 1949. Allí se ordenó la “suspensión del cobro de aranceles universitarios actualmente vigentes”, lo que derivó luego en la gratuidad de esta enseñanza superior, hecho que permitió el acceso a la universidad a todos los sectores sociales.

Así, mientras la “Reforma Universitaria” fue la culminación de un proceso de lucha estudiantil llevado a cabo durante el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, cuyos efectos marcaron en forma indeleble el diseño uni-

(22) No obstante la autonomía reconocida en esa ley, por medio del artículo 46, se determinaba que los docentes debían ser designados por el Poder Ejecutivo, con lo cual, indudablemente la ley no establecía una autonomía de carácter pleno, tal como se proclamaba en sus primeros artículos.

(23) Constitución Nacional de 1949, artículo 37, sec. IV, inc. 4º: “Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentara su organización y funcionamiento”.

versitario nacional, la gratuidad universitaria constituyó el complemento necesario por el que quedó diseñada definitivamente la silueta de nuestra educación superior. En otras palabras, el decreto de gratuidad de los estudios universitarios fue el instrumento que completó la arquitectura del sistema que propugnaron los reformistas de 1918 (Sileoni, 2012).

La gratuidad, sumado a la sanción de la ley 13.229 (24), por la que se creara la “Universidad Obrero Nacional”, hoy denominada “Universidad Tecnológica Nacional” (UTN), fundada con el objeto de ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior de las clases trabajadoras, produjo que este proceso político, aún con sus críticas, generara un aumento en forma exponencial de la matrícula universitaria, que pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.

VIII. Consagración constitucional de la autonomía y la gratuidad de la universidad pública

El artículo 14 de la Constitución Nacional, texto de 1853 pero que perdura en la actual redacción, reconoce el derecho de “enseñar y aprender”, entendida en una acepción amplia, esto es, incluye el derecho a la educación, a informarse, a investigar y a difundir sus resultados. Por su parte, también la Constitución histórica ponía en cabeza del Congreso de la Nación la competencia de dictar “planes de instrucción general y universitaria” (art. 67 inc. 16, actual art. 75 inc. 18 luego de la Reforma del año 1994).

Respecto a los “planes de instrucción general y universitaria” referidos en el inciso precedentemente mencionado, Joaquín V. González entendía que esos programas no se referían a la educación primaria, que por medio del artículo 5º ponía en cabeza de las provincias esta responsabilidad (González, 1935, p. 165).

En el año 1994 la Convención Nacional Constituyente incorporó el inciso 19 al artículo 75 –las competencias que le corresponden al Congreso de la Nación–. Allí, finalizando el tercer párrafo se afirma que le corresponde al Congreso de la Nación:

(24) Ley 13.229, sancionada el 19 de agosto de 1948 y publicada en el Boletín Oficial del 31/08/1949.

(...) Sancionar leyes de organización y de bases de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales... y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales (...).

De esta forma quedó definitivamente reconocida la autonomía universitaria en nuestra Constitución, tal como se había hecho en el texto de 1949, este último, de efímera duración. Así el artículo 75 inciso 19 de la reformada Constitución, al decir de Miguel Berri, elevó al rango de garantía constitucional a la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Este mismo autor sostuvo que el constituyente, al haber calificado a la universidad pública de autónoma y autárquica, habría consagrado una autonomía plena (Berri, 1998).

Por lo tanto, debe ser entendida la autonomía como la potestad de las universidades de dictar sus propios estatutos, mientras que la autarquía como competencia de autogobernarse sin injerencias de poderes extraños.

De igual modo no es incompatible la autonomía con la potestad del Congreso de la Nación tanto de crear universidades, como así también de sancionar leyes de bases por las que se establezcan contenidos mínimos de organización, las que luego deberían ser reglamentados por los estatutos que dicte cada universidad y sus distintas unidades académicas (Berri, 1998).

Sobre la “gratuidad y equidad” en la educación pública estatal, en principio, se traduciría en un imperativo por el que la enseñanza estatal universitaria no podría ser arancelada. Con motivo de la discusión en el plenario de la Convención Nacional Constituyente, el miembro informante Jesús Rodríguez, expuso que las ideas de gratuidad y equidad deben entenderse como complementarias toda vez que la equidad significaría que “se impone al Estado la carga de proveer a los habitantes de los medios suficientes para acceder a la educación gratuita” en aras de lograr de esta manera una efectiva igualdad de oportunidades, si la gratuidad no es suficiente para ello (25).

(25) Diario de Sesiones de la Honorable Convención Nacional Constituyente de 1994. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

IX. Colofón

Rafael Hernández, como autor del proyecto por el que se funda la Universidad de La Plata, como así Dardo Rocha como ejecutor de esa idea, fueron los que establecieron las bases sobre las que luego se construyó la “Universidad Nueva”.

Joaquín V. González le dio a la Universidad Nacional de La Plata, un espíritu y mística, basados en sus propios ideales. Para ello fue acompañado por docentes e investigadores de primer nivel. De esta forma surgió en nuestra universidad un modelo “científico”, pero sin abandonar el “profesionalismo”, con el que en ese entonces se identificaba a las universidades de Córdoba y Buenos Aires.

Dijo Joaquín V. González en su discurso de despedida como presidente de esta Alta Casa de Estudios:

Nació esta Universidad en momentos de honda conmoción del alma de la juventud argentina y de la opinión avanzada del país, que pedían reformas de los sistemas vigentes y de las costumbres inveteradas en los antiguos institutos superiores; y nació no como un efecto inmediato de los sucesos lamentables que perturbaron la serena evolución de la grande Universidad de la capital, sino como comprobación de arraigadas ideas, y de la necesidad impostergable de ofrecer a las nuevas corrientes del espíritu, nuevos moldes y cauces adecuados; y como un modo de renovar una vieja selva no es injertar en troncos vetustos, sino reemplazándolos por otros en el mismo conjunto, se optó por el sistema de crear una universidad distinta en la capital de la provincia de Buenos Aires (...) (González, 1918).

La Reforma del año 1918 lo impacta, pero no destruyó este espíritu, sino que colaboró en su fortalecimiento, por medio de la incorporación de mayores voces y de esta forma se fueron incorporando contenidos democráticos (Coll Cárdenas, 2004).

La Reforma Universitaria se expandió no solo a las unidades académicas existentes en nuestro país, sino su espíritu trascendió las fronteras, siendo adoptada por toda América Latina.

Con motivo del cincuentenario de la Reforma Universitaria, sostenía Gabriel del Mazo, uno de los protagonistas de la gesta que por medio de esta obra se recuerda, que

El estudiantes, sea alumno, profesor o graduado, debe ser a la vez que universitario, un ciudadano activo en la vida política, sin confundir el terrero ni los modos de una y otra de estas actividades de finalidad concurrente. La Universidad debe nutrir culturalmente la Política, cuya influencia popular es más extensa, y la Política sostener de la Universidad su amplio vivir y su contribución al servicio nacional (del Mazo, 1968).

Del Mazo en forma clara y precisa, con motivo del discurso pronunciado bajo los auspicios de la Federación Universitaria del Sur y del Colegio Libre de Estudios Superiores, en conmemoración del 25 aniversario de la Reforma Universitaria, en el Aula Mayor de la Universidad del Sur, Bahía Blanca, el 17 de julio de 1943, en una excelente síntesis de los objetivos que tuvo la mentada reforma, como así de los propósitos que debe tener la universidad en nuestro país, sostuvo que

constituyen la república universitaria, en primer término sus alumnos, luego los alumnos graduados, hijos adultos de la Universidad. De sus graduados seguirán la vida activa universitaria, los investigadores, los auxiliares docentes, los profesores libres. Este será el almacigo magistral, el vivero docente de donde, con madurez, saldrán, en el gran hogar de estudios los más doctos, los profesores titulares y los maestros orientadores.

La universidad es un espíritu de unidad creciente y expansiva, con un cuerpo y con un espíritu; y, por ese carácter orgánico, sucede que le es posible y necesario su propio desarrollo y adecuación social, y capacidad de criticarse, controlarse y reformarse a sí misma. Su soberanía radica en el claustro pleno. Allí está la fuente de su derecho; de allí la razón de su autonomía en un estado democrático la autonomía universitaria solo se legitima en la integración de la Universidad con todos sus miembros y en el carácter democrático de su gobierno, basado en la universalidad de la ciudadanía interna. La libertad universitaria, exigencia ineludible de su función y el más alto honor de independencia

en una sociedad republicana, no es así un acto, es una creación, es un proceso: es para la Universidad el noble e incesante esfuerzo de su integración y sistema.

El alumno, el profesor, los planes, los métodos, la enseñanza todo debe tener en los graduados una insustituible colaboración. Ellos son miembros calificados de toda universidad que se conciba plenariamente; representantes internos del interés social.

Los alumnos, los graduados con licencia profesional y los graduados con licencia docente son, para una Universidad completa, las tres calidades esenciales, los tres brazos de su actividad, de su organización. Cuando lleguen a concertarse funcionalmente, serán a su vez los tres estamentos de su gobierno.

Cada vez es más claro que no hay un ideal abstracto de educación. La educación se refiere a un hombre dado, a un pueblo dado. La formación universitaria es la formación de los nacionales en la Nación es pedagogía nacional. Las universidades nacionales son órganos de la Nación para el examen de los problemas que afectan su vida. Escuelas de gobernantes, de trabajadores, de maestros, que sean del país sus intérpretes, servidores y defensores. Es el país, es la realidad territorial y humano del país, de su naturaleza y de sus hombres, de la vida y de los anhelos de sus hombres el verdadero 'centro de interés' de la Universidad; su esencia viva y reclamante (del Mazo, 1943).

Como ya fuera expuesto, el proceso por el que se reconoció autonomía universitaria fue complementado en 1949 al disponerse la gratuidad de los estudios superiores.

La autonomía como la gratuidad son dos principios que finalmente quedaron consagrados definitivamente por el constituyente en el año 1994, incluyéndolo en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

De esta forma, concluyo por medio de otras palabras de del Mazo, quien sostuvo que los alumnos, profesores y profesionales, desde el punto de vista simbólico constituyen "un bien patrimonial" del país, razón por la cual deben actuar en forma leal y con capacidad de servicio, siendo todas esas partes "la concreta expresión social de la Universidad", y así "custodian su espíritu de un lado a otro de la Nación" (del Mazo, 1943).

X. Aclaración final

Al principio del trabajo se hizo referencia de “seis generaciones” ligadas la Universidad de La Plata. Paso a explicar: la *primera generación* está representada por mi tatarabuelo Dalmiro Alsina, primer decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, aún provincial; la *segunda generación*: mi bisabuelo por línea paterna Enrique Herrero Ducloux, quien fuera el primer decano de la Facultad de Química y Farmacia, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata entre los años 1913 y 1916, además de haber sido el que propuso a Joaquín V. González la hoja de roble como símbolo de nuestra universidad; en la *tercera generación*, se encuentra mi abuelo materno René Orsi, quien en el año 1945 fuera presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata y delegado a la FULP, ello, claro está, antes de que se recibiera de abogado. En esta misma facultad, años después, fue profesor titular de Historia Constitucional; a su vez, fue convencional constituyente en 1949 –para la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires– y convencional nacional constituyente de 1994, oportunidad en la que siendo miembro titular de la Comisión Redactora, participó activamente en la confección del texto de la norma hoy insertada en el artículo 75 inciso 19. Agregó que una de las obras de Del Mazo aquí citadas posee una respetuosa dedicatoria del autor a mi abuelo, que conservo en mi poder. La *cuarta generación* la conforman mi padre Juan José Herrero Ducloux y mi madre María Cristina Orsi. Ambos recibidos en la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra Universidad. Los dos obtuvieron el doctorado en Ciencias Naturales: mi padre con orientación en Geología, y mi madre en Botánica, quien, además, por muchos años fue investigadora y profesora por concurso de la carrera de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales, en la asignatura “Plantas Vasculares I”; la *quinta generación*, humildemente la integro yo, que egresé con el título de abogado en esta Facultad, donde tengo el honor de ser profesor adjunto ordinario por concurso de la asignatura Derecho Constitucional; finalmente la *sexta generación*, la integran mis hijos mayores, Justina y René Herrero Ducloux, quienes al momento de escribir estas líneas, están llevando a cabo el Curso de Ingreso a la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de La Plata. Por su parte, mi tercer hijo, Juan Herrero Ducloux, comenzaría sus estudios también en esta Universidad, el próximo año.

En definitiva:

(...) el ayer, el hoy y el mañana son las etapas del camino, inexistentes en sí mismas, pero formando parte de nuestro propio ser, constituyendo ese fugaz relámpago de nuestra vida sobre la tierra: en el primero penetramos por el recuerdo, el segundo nace y muere de continuo, el tercero es un misterio. Y puesto que el hoy se forma del ayer y de él vivimos, vamos a reflejar el presente, para pedirle la clave del futuro (...) (Herrero Duclox, 1909, p. 59).

Por lo tanto, tengo el inmenso orgullo de ser parte de una de las seis generaciones que han sido, son y serán una pequeña parte que conforma la gran Universidad Nacional de La Plata, y agradezco a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y al Dr. Juan Carlos Corbetta en particular, la oportunidad de poder contar estas cosas, con motivo de la histórica “Reforma Universitaria” de la que me siento un beneficiario.

XI. Bibliografía

Avellaneda, N. (2004). Citado *Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria*, N° LVIII. Buenos Aires.

Berri, M. (1998). La autonomía universitaria en la Constitución Nacional. *Revista La Ley*. (1998-C, p. 1348). Buenos Aires.

Coll Cárdenas, M. (2005). Joaquín V. González y el espíritu universitario platense. *Revista de la Fundación Museo de La Plata ‘Francisco P. Moreno’*, 19 (pp. 84-87). La Plata.

Crispiani, A. (1997). La ‘Universidad Nueva’ de Joaquín V. González y el proyecto de 1905. *La Universidad de la Plata y el Movimiento Estudiantil*. La Plata: Editorial de la UNLP.

Del Mazo, G. (1943). *La Reforma Universitaria, brazo de una Conciencia Nacional*. Bahía Blanca: Federación Universitaria del Sur.

Del Mazo, G. (1968). *Meditaciones del Cincuentenario. A los 50 años del movimiento argentino y latinoamericano de la Reforma Universitaria*. Buenos Aires.

Del Mazo, G. (1976). *La vida de un político argentino*. Buenos Aires: Plus Ultra.

Gandolfi, F. F. (1997). Pretérito imperfecto. *La Universidad de la Plata y el movimiento estudiantil*. La Plata: Editorial de la UNLP.

González, J. V. (1918). La Universidad Nacional de La Plata. *Un ciclo universitario*. Buenos Aires: Talleres Peuser.

González, J. V. (1935). *Manual de la Constitución argentina*. Buenos Aires: Estrada.

Herrero Ducloux, E. (1909). Prólogo de Joaquín V. González. *Fantasia y Ciencia*. Buenos Aires: Cabaut y Cía. Editores.

Marías, J. (1952). La Universidad: realidad problemática. *La Universidad en el siglo XX*. Lima: Universidad Mayor de San Marcos.

Mayón, C. A. (2005). La fundación de la Universidad Nacional de La Plata y de su facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. *Revista Anales*, N° 36 (p. 20). Buenos aires: La Ley.

Merryman, J. H. (2014). *La tradición jurídica romano-canónica*. México: Fondo de Cultura Económica.

Molina, M. (2014). La autonomía institucional y académica de las universidades nacionales. Evolución conceptual en la legislación y jurisprudencia argentina. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, N° 13, vol. V, (pp. 66 a 89).

Sáenz Peña, R. *Escritos y discursos*. Buenos Aires: Casa Jacobo Peuser.

Sagastume, C. (1944). *Historia de la Facultad de Química y Farmacia de La Plata (1889-1919)*. Recuperado de <https://www.biol.unlp.edu.ar/historiafacultad.htm> [Fecha de consulta: 21/09/2018].

Sileoni, A. (2012). Gratuidad, inclusión e igualdad educativa. *Página 12*, 26/11/2012 (p. 11).

Vallejo, G. (1997). El culto de lo bello. La universidad humanista de la década del 20. *La Universidad de la Plata y el Movimiento Estudiantil*. La Plata: Editorial de la UNLP.